LA REFORMA POLITICA DEL DISTRITO FEDERAL: UN PROCESO INCONCLUSO

Luisa Béjar Algazi

Resumen

El Distrito Federal es un caso que no puede pasarse por alto en el proceso de democratización de la vida política puesta en marcha por México. Su impacto sobre el conjunto del país no deja en forma alguna lugar a dudas. Los retos que la Capital de la República ha tenido que resolver para ponerse acorde a los nuevos tiempos, sin embargo, no han sido sencillos.

En este escrito se hace una revisión de éstos y de los problemas que aún es necesario solucionar para concluir la transformación política de la entidad según los cánones de la democracia.

Abstract

The Federal District is an issue that cannot be ignored in Mexico's political democratization process. Its impact over the country as a whole leaves no room for questions. The challenges that the capital city has had to solve in order to cope with the new times, nevertheless, have not been easy at all.

In this article a review of those difficulties has been made, as well as of the problems still in need of attention in order to conclude the political transformation of the city under the logics of democracy.

El Distrito Federal es un caso —que no puede pasarse por alto— en el proceso de democratización de la vida política en México. En su territorio no sólo se asientan los Poderes Federales, sino que además la entidad ha conformado durante muchos años una de las concentraciones demográficas y económicas más importantes del país. Su efecto en el desarrollo general del entorno nacional no deja lugar a dudas.

Los retos que la capital de la República ha tenido que resolver —para ponerse acorde a los nuevos tiempos políticos— no han sido sencillos. Su desenlace se ha visto obligado a enfrentar múltiples obstáculos a lo largo de una historia que todavía no acaba de escribirse. Restituidos los derechos ciudadanos a sus habitantes —que durante mucho tiempo les fueron negados—, el problema ahora se centra en la definición de sus relaciones con los poderes de la Federación, y en la auto-nomía de su gobierno, incluida desde luego, la correspondiente a las distintas unidades político-administrativas en que actualmente se divide su territorio.

Por fortuna, los afanes de reforma —impulsados por diferentes actores en el plazo de por lo menos las últimas cuatro décadas— parecen encontrarse en su tramo final. Para llegar a este punto se ha requerido el afianzamiento de una pluralidad política capaz de romper con viejos monopolios de poder, contrarios a un manejo eficiente y responsable de los asuntos públicos. En este escrito se reflexiona sobre algunos aspectos relativos al vasto proceso de transformación que acompaña la construcción de una estructura política plenamente democrática en el Distrito Federal.

1. En el ayer

Un breve repaso de los acontecimientos que marcan el pasado de la capital permite apreciar lo mucho que se ha avanzado en este campo, pero también los pendientes que aún se encuentran en espera de solución. Cabe recordar que la creación del Distrito Federal coincide con el debate de 1824 para la adopción de una constitución federal en el país.

En este documento también se faculta al Congreso para establecer

la sede de los poderes federales y para fungir como el Poder Legislativo en la localidad. Dificultades de orden político, financiero y administrativo determinan que su gobierno quede bajo la jurisdicción del gobierno general, encargado de designar a un gobernador interino, y que los ayuntamientos comprendidos en la demarcación sean objeto de elección una vez aprobadas las leyes respectivas.¹

Después de un arduo debate —que pretendió corregir la exclusión política que aqueja a sus moradores—, el Constituyente de 1857 decidió la incorporación del D.F. como una de las figuras fundadoras del Pacto Federal bajo el nombre de Estado del Valle de México. No obstante, la existencia de la nueva entidad se condicionó al traslado de los poderes federales a otro lugar.

El acuerdo político entre moderados y liberales en el Congreso determinó que la elección popular de sus ayuntamientos quedara sujeta a la reserva anteriormente prevista. La riqueza y la población concentrada en su territorio fueron elementos definitivos en esta decisión. El D.F. quedó como un “Estado con poderes suspendidos” en forma temporal, si bien públicamente se reiteró la intención de constituirlo como un estado regular si éstos optan por cambiar de sede en el futuro.²

Con el porfiriato y su consigna de “poca política y mucha administración”, la autoridad central promovió diversas reformas legales a fin de establecer los actuales límites del Distrito Federal. De igual modo, definitivamente se eliminó la elección directa de sus ayuntamientos y de sus autoridades judiciales. En el mismo sentido, se decidió que el orden administrativo, político y municipal de la entidad dependerían del presidente de la República, quien ejercería sus atribuciones respectivas por conducto del Secretario de Gobernación.³

La Constitución de 1917 ratificó en su artículo 43 la voluntad del

¹ Ignacio Marván, “Gobierno representativo en el Distrito Federal”, en *Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, núm. 4, México, IJ-UNAM, enero-junio de 2001, pp. 52 y ss.

² Arnaldo Córdova, “Repensar el federalismo”, en *Diálogo y Debate*, núm. 4, p. 20.

³ Ignacio Marván, *op. cit.*, p. 54.

constituyente de incluir al D.F. en la lista de las partes cofundadoras del pacto federal, y de reestablecer las bases del gobierno municipal con ayuntamientos de elección popular, poniendo fin a su eliminación anterior. Empero, se mantuvo la facultad del Congreso de la Unión de expedir la legislación relativa a la capital, y se estableció que su gobernador y procurador de justicia podían ser designados y removidos por el presidente de la República.

En 1928 el D.F. quedó nuevamente excluido del régimen municipal que privaba en todos los estados de la República. La mudanza procede de la iniciativa enviada al Congreso de la Unión por el entonces candidato presidencial, Alvaro Obregón. En su argumentación sostuvo que el régimen municipal no ha logrado alcanzar ahí los fines previstos por los conflictos de carácter político y administrativo generados como resultado de la coexistencia de autoridades con facultades excluyentes, cuando no confusas. Su gobierno —añade— debe ser en consecuencia sometido a la jurisdicción directa de la federación ya que incumbe no sólo a sus habitantes, sino a todo el país.⁴

En 1931 la capital del país experimenta una reestructuración con respecto al número de sus delegaciones. Lo mismo ocurre en 1941. Para ese momento, el Consejo Consultivo y los Consejos Delegacionales, creados en 1928 a fin de compensar la desaparición de los municipios y para dotar a la ciudadanía con nuevos canales de expresión, pierden su orientación inicial al eliminarse sus facultades de iniciativa y vigilancia. Su actividad queda así restringida únicamente a la presentación de informes sobre obras, servicios y otros actos protocolarios.

⁴ A partir de esa fecha y hasta 1993, de acuerdo al artículo 73 constitucional y la *Ley Orgánica del D.F.*, el gobierno de la entidad queda completamente en manos del presidente de la República, quien lo ejercerá por conducto del Jefe del Departamento del D.F. y delegados, a los que podrá designar y remover sin restricción alguna. En lo que respecta a la legislatura local, ésta es asumida por el Congreso de la Unión, garantizándose el derecho a sus habitantes de elegir un número de diputados acorde a su base demográfica y a dos senadores como cualquier entidad federativa. Octavio Rodríguez Araujo, "Partidos Políticos en el Distrito Federal", en Pablo González Casanova y J. M. Ramírez Sáenz, *Gobierno y sociedad civil*, México, El Caballito, 1987.

Las consideraciones que confirman posteriormente la validez de esta medida no son ajenas al papel desempeñado por el Distrito Federal en la consolidación del presidencialismo mexicano.⁵ Como en otros aspectos de este proceso, se trata de dotar al Ejecutivo con los recursos políticos y económicos necesarios para asegurar su independencia de acción frente a cualquier otra instancia capaz de acotar su poder de decisión.

La anomalía que vive la Capital de la República habrá de repararse hasta que sus habitantes comiencen a dar muestras de cansancio e inconformidad por los graves problemas como resultado de su exclusión de los derechos políticos más elementales. De esta suerte, no es casual que la votación recibida por el partido oficial en el Distrito Federal —a diferencia de otras entidades de la República— haya empezado a declinar desde fines de la década de los cincuenta.⁶

2. Más recientemente

Con el impulso de la reforma electoral de 1963 y la creación de los “diputados de partido”, la Cámara de Diputados se constituyó en uno de los foros más sensibles a la insatisfacción ciudadana por la forma de gobierno vigente en el D.F. En esta tesitura, los partidos de oposición presentaron varias iniciativas de reforma para terminar con el régimen de exclusión de sus habitantes.⁷ La imitación del número de representantes adscritos a sus fórmulas —en mucho debido a los amarres del régimen y otras circunstancias relacionadas con su propia realidad—, que no dé razones de validez indiscutible en cualquier régimen político de naturaleza democrática, impiden que cualquiera de ellas prospere en el Congreso.

⁵ Sobre el tema se puede ver, José Castelazo, *La reforma posible: escenario en el Porvenir*, México, INAP, 1992, pp. 31 y 32.

⁶ Ver, Lorenzo Meyer, “Veinticinco años de política mexicana”, en *Comercio Exterior*, vol. 25, núm. 12, diciembre de 1975.

⁷ Al respecto se puede consultar Luisa Béjar, *El papel de la Legislatura en el sistema político mexicano (1964-1979)*, México, UNAM-FCPyS, Tesis de Doctorado, 1995.

La reforma política de 1977 se acompañó de modificaciones a diversos artículos constitucionales para tratar de resarcir a los capitalinos de su carencia de un órgano legislativo propio. Los cambios promovidos incluyeron además la obligatoriedad de someter a referéndum —o de ser objeto de iniciativa popular— los ordenamientos legales y reglamentos que la ley determinara. Los nuevos instrumentos ofrecidos en compensación a sus pobladores no llegaron a aterrizar en acciones concretas debido a la ausencia de expedición de la norma respectiva.

Los sismos de 1985 pusieron al descubierto el creciente descontento por la excepcionalidad política de la capital. Como se recordará, tanto el gobierno federal como las autoridades del Departamento del Distrito Federal se mostraron incapaces ante la emergencia, sin que a ninguna de ellas se les pudiera pedir cuentas por la omisión o la deficiencia de sus actos. En este sentido, tales sucesos prepararon el terreno para la reforma de 1987 que creó la primera Asamblea de Representantes del D.F. El nuevo órgano careció de facultades legislativas en el orden local, mismas que una vez más conservó el Poder Legislativo Federal.

En efecto, con la reforma de ese año al artículo 73 constitucional, fracción VI, se confirmó al Congreso de la Unión como la única instancia competente para legislar en todo aquello concerniente a la capital de la República. Por su parte, la Asamblea únicamente dispuso de la facultad de iniciar leyes o decretos ante ese órgano federal, en asuntos relativos a la entidad, y la de citar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno.⁸

El camino para subsanar esta privación tendría que superar todavía otras pruebas. Una de ellas —sin duda clave en el proceso de democratización del país— fue el surgimiento de un nuevo sistema electoral y de partidos luego de los comicios federales del 6 de julio de 1988.⁹

⁸ El régimen relativo al D.F. se encuentra recogido en el artículo 122 de la Constitución.

⁹ Con ello se anuncia el fin del sistema de partido hegemónico y el paso a uno que podría ser denominado, de acuerdo a la tipología de Sartori, como un sistema competitivo de partido dominante. G. Sartori, *Partidos y sistemas de partidos*, vol. 1, Madrid, Alianza, 1987.

Entonces, la LIV Legislatura, conformada con los resultados arrojados por esa jornada electoral, registró en la Cámara de Diputados una mayoría absoluta sólo superior en 14 curules para el Partido Revolucionario Institucional (PRI).¹⁰ El desarrollo de las sesiones camarales perdió su antigua tersura y obligó al gobierno a negociar sus propuestas con la oposición.¹¹ A esto se sumó la exigencia de contar con su apoyo para lograr la aprobación de cualquier iniciativa de reforma constitucional, toda vez que el PRI carecía ya del control sobre el voto calificado en esa Cámara.

Un hecho que no carece de significación es la articulación del régimen en torno a la existencia de una organización política capaz de mantener, bajo estrictos límites, la participación ciudadana y la expresión organizada de corrientes de opinión diversas a la suya.¹² Entre otras cosas, la mudanza permite la activación del Poder Legislativo como un foro más vigoroso para la ventilación de los principales conflictos del país. Esto contempló el debate desde su tribuna de las distintas fuerzas políticas sobre la excepcionalidad que en diferentes aspectos todavía marca de manera claramente antidemocrática la vida política del D.F.

La experiencia de la LV Legislatura (1991-1993) consigné la recuperación del régimen priísta, pero no la anulación del proceso de transición en curso.¹³ Bajo sus efectos, la reforma política de 1993 extendió las facultades legislativas de la Asamblea de Representantes del D.F., lo que incluyó la aprobación de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos. Empero, en el artículo 122 constitucional se ratificó la facultad

¹⁰ Las cifras y las consecuencias de este hecho se pueden consultar en el texto de Juan Molinar Horcasitas, *El tiempo de la legitimidad*, México, Cal y Arena, 1991, pp. 223 y 224.

¹¹ Rodolfo Rivas Duarte, "Significado del Poder Legislativo en la Reforma del Estado Mexicano", en *Revista Mexicana de Estudios Parlamentarios*, enero-abril 1991.

¹² Según Morlino, el paso de un régimen a otro comporta siempre un cambio fundamental: el nuevo régimen se presenta, en algunos o en todos sus aspectos esenciales, como diverso del anterior. Ver del autor, *Cómo cambian los regimenes políticos*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985, p. 104.

¹³ En la elección legislativa de 1991 la fracción del Revolucionario Institucional ve elevarse la cifra de sus diputados hasta 320, mientras en el Senado sus miembros ocupan 61 de las 64 curules disponibles.

del Congreso de la Unión de expedir el Estatuto de Gobierno de la entidad, y de legislar en lo relativo a la misma, salvo en las materias expresamente otorgadas a ese órgano. Así, los capitalinos y su órgano legislativo quedaron nuevamente impedidos para participar de manera directa en la reglamentación de los derechos políticos y en la regulación de su gobierno local.

Igualmente, la reforma de 1993 estableció que el titular de la administración pública del D.F. sería nombrado por el presidente de la República de entre cualquiera de los representantes de la asamblea, diputados federales o senadores electos en el D.F. que pertenecieran al partido político mayoritario en la Asamblea. Con ello —vale la pena apuntar— se sentaron las bases para el establecimiento de un gobierno propio aunque bajo un régimen especial, toda vez que la elección del jefe de Gobierno sería bajo un formato indirecto. Al respecto, cabe advertir que éste sería el último esfuerzo por preservar —aunque fuera de manera parcial— el dominio del Ejecutivo federal sobre las autoridades de la capital, para evitar la creciente desarticulación del antiguo presidencialismo mexicano con la pérdida de una más de sus piezas clave.

Tres años después, la reforma de 1996 admitió la elección directa por voto universal, libre y secreto del jefe de Gobierno y de los titulares de las demarcaciones territoriales. De igual modo, se observó el acrecentamiento de la competencia de la Asamblea Legislativa del D.F. para expedir leyes, incluida la que debería regular los procesos electorales en la entidad. No obstante, una vez más se incorporó la concepción de un gobierno “concurrente” para la entidad al quedar éste encargado —al mismo tiempo— a autoridades del orden local y federal en distintas materias.

De esta manera, se eludieron los cambios necesarios en materia de autonomía y responsabilidades para dar al D.F. una estructura de gobierno coherentemente democrática.

Por último, ante la dificultad de construir los acuerdos para impulsar una reforma constitucional —mediante una modificación al Estatuto de Gobierno pactada por todos los partidos políticos— a partir de octubre de 1999 se establecieron también los dispositivos legales que otorgaron a los habitantes de la capital la posibilidad de elegir directamente a su jefe

Delegacional. Esto ocurrió a partir de las elecciones federales y locales del 2 de julio de 2000.

3. De las limitaciones en el presente

A pesar de los avances logrados en cuanto al otorgamiento de los derechos políticos antes negados a los capitalinos, la lista de las restricciones que aún pesan sobre el D.F. es extensa. Sus autoridades se encuentran todavía en espera de ejercer plenamente el poder que democráticamente les ha sido conferido. En primer lugar, destaca la imposibilidad de contar con una constitución propia, como ocurre en el resto de las entidades federativas. La importancia de este asunto es innegable toda vez que supone la persistencia de múltiples perjuicios para sus habitantes. Aquí cabe referir la falta de autonomía de la entidad para determinar la estructura y el funcionamiento político-administrativo de su gobierno.

Si la democracia es autodeterminación en todos los aspectos, para los capitalinos la oportunidad de establecer las formas en que el poder político ha de organizarse y de ejercerse no ha podido concretarse. Aunque la integración de sus órganos de gobierno puede ya exhibir una legitimidad de origen, en su actuación cotidiana —esto es, ligada a la legitimidad conseguida en los hechos—, debe sujetarse a la existencia de un estatuto especial para el D.F. que mengua sus atribuciones, o las coloca como facultad de los poderes federales.

En el mismo sentido, conviene apuntar el recorte que exhiben las facultades entregadas a su órgano legislativo, sin capacidad para intervenir en la modificación de la norma fundamental —léase Constitución—, ni para proponer iniciativas de reforma a sus leyes ordinarias. El derecho de iniciar leyes o decretos, según lo previsto en el artículo 71, corresponde sólo al presidente de la República, a los diputados y senadores al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados.

Por otra parte, de acuerdo al artículo 135, el proceso de adición o reforma de la Constitución demanda exclusivamente la aprobación del voto de las dos terceras partes de los individuos presentes en las cáma-

ras del Congreso de la Unión y de la mayoría de las legislaturas de los estados.

Más grave aún resulta su impedimento para iniciar leyes directamente ante el Poder Legislativo Federal —en lo relativo al régimen interior del D.F.—, o para gestionar directamente los montos de endeudamiento requeridos para el financiamiento de su presupuesto de egresos. En este sentido, el artículo 122, apartado A, fracción III, establece que corresponde al Congreso de la Unión legislar en materia de deuda pública del D.F., mientras en el apartado B, fracción I, apunta que corresponde al presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos “iniciar leyes ante el Congreso de la Unión en lo relativo al Distrito Federal”.¹⁴ Según se observa, en estos temas su sujeción a la Federación es a todas luces mucho más amplia que la que aplica sobre las otras entidades del pacto federal.

Ahora bien, por si esto fuera poco, los representantes electos por los capitalinos tampoco tienen facultad para expedir el *Estatuto de Gobierno del Distrito Federal*, lo que significa que sus autoridades no pueden incidir en la creación de un marco jurídico que estimule un desempeño traducido en capacidad para solucionar las problemáticas de su competencia. En cambio, esta facultad se entrega al Congreso de la Unión, lo que significa que en este asunto como en cualquier otro relativo al D.F. gravitan los distintos factores que pesan sobre la coyuntura nacional. Dicho en pocas palabras, la solución de sus problemas queda expuesta a ser contaminada por el entorno político y partidista del país en general.

4. Más en la agenda de los pendientes

Ciertamente, el trazo seguido por la reforma política del D.F. ha generado otras inconsistencias que afectan seriamente su régimen interior de

¹⁴ Ver también artículo 32 del Estatuto de Gobierno del D.F., fracciones II, III, IV y VIII.

gobierno. Uno de ellos es el desequilibrio de poderes derivado del predominio del órgano ejecutivo sobre el legislativo desprendido de dos situaciones: por un lado, la Asamblea Legislativa del D.F. se encuentra minada por su relación con los poderes federales y las disposiciones de carácter tutelar que aún pesan sobre ella. En este sentido, no pasa desapercibido que ésta ha de regirse con facultades expresas, lo que supone una aplicación inversa de lo dispuesto por el artículo 124 constitucional para los estados.¹⁵

Otro aspecto es la facultad del Poder Ejecutivo Federal para determinar los montos de endeudamiento necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos del D.F., y de la Cámara de Diputados de asumir su aprobación, o de entregar a la Contaduría Mayor de Hacienda de la misma instancia la responsabilidad de actuar como órgano vigilante de los recursos provenientes del endeudamiento del D.F.¹⁶

Por otro lado, aunque el jefe de Gobierno del D.F. todavía se encuentra sujeto a un régimen de excepción al quedar expuesto a ser removido por el Senado como resultado de la presunta existencia de causas graves que afecten sus relaciones con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la República o la Cámara de Diputados, su relación con la legislatura reproduce en distintos rubros el mismo desequilibrio que aqueja a los poderes federales.¹⁷

Por lo mismo, ésta no puede citar a comparecer al Ejecutivo local en diversas ocasiones a la presentación de su informe de gobierno o aprobar el nombramiento de los miembros principales de la administración pública local. De igual manera, también está impedida para proponer el nombramiento de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del D.F., del

¹⁵ Artículo 36 del Estatuto de Gobierno del D.F.

¹⁶ Artículo 122 constitucional, apartado B, fracción III, y Artículo 42, fracción II, del Estatuto de Gobierno del D.F. Ver también Artículo 25 del Estatuto de Gobierno.

¹⁷ Artículo 28 del Estatuto de Gobierno del D.F. También ver, por ejemplo, fracción V del Artículo 42 del Estatuto de Gobierno del D.F., relativo a la facultad de la Asamblea Legislativa para formular observaciones al programa general de desarrollo de la entidad que le remita el Jefe de Gobierno para su examen y opinión, pero no para su aprobación.

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Instituto Electoral del D.F. o de la Comisión de Derechos Humanos.

Adicionalmente, no está de más advertir que el jefe de Gobierno del D.F. cuenta con competencias no ejercidas por sus similares en los estados, toda vez que éstas dependen del orden municipal de gobierno. Su concentración en una sola persona en el caso de la capital de la República alienta el desarrollo de conflictos permanentes entre el titular de la administración pública local y los jefes delegacionales. La ingobernabilidad es, en consecuencia, una amenaza siempre latente. De ahí que el problema requiera —de manera urgente— la introducción de modificaciones en la norma.

5. Ya para concluir

Así las cosas, es fácil concluir que la reforma política del Distrito Federal, a pesar de las múltiples y muy variadas fórmulas de reparación política experimentadas hasta ahora, no ha finalizado. Aunque a la luz de la celeridad con que cambia la vida cotidiana sería mejor hablar de un proceso “permanente” de reforma política en la entidad, para terminar con el déficit democrático que observan sus ciudadanos y sus autoridades, todavía es necesario dar numerosos pasos. Uno de ellos —quizás el más importante— sería el aceptar que la capital pudiera contar —como los otros miembros del pacto federal— con su propia Constitución. Esta decisión permitiría avanzar en la necesaria nivelación del D.F. frente a las otras entidades federativas.

Para ello, se requiere reformar la Constitución Federal en sus artículos 44, 71 y 135, a efecto de equiparar los derechos legislativos de la capital con respecto a aquellos de que gozan los estados, y el 122, para que ésta cuente con una carta fundamental de carácter local y llegue a su fin la relación de dependencia que la ha unido con la federación.¹⁸ En

¹⁸ En el artículo 44 constitucional se establecería la igualdad de categoría del D.F. con las otras entidades federativas, sin menoscabo de su coincidencia territorial con la sede

este último punto habría que introducir también la precisión de que la Asamblea Legislativa del D.F. pueda ejercer facultades plenas excepto en aquellas áreas reservadas para la federación, lo que incluye legislar en materia de deuda pública, y para asumir la vigilancia de dichos recursos.¹⁹ En forma complementaria, tendrán que ser reformados los artículos 73 y 89 de la Constitución en aquello que se oponga al nuevo diseño institucional de la capital.²⁰

Otro aspecto que deberá ser revisado en aras de lograr el establecimiento de una nueva relación de convivencia entre los poderes federales y locales es la posibilidad de remover al jefe de Gobierno del D.F. Esto significa examinar el artículo 76 constitucional en su fracción IX, y los artículos 27, 28, 32 y 66 del Estatuto de Gobierno.

Por último, es de esperarse que la responsabilidad del Ejecutivo federal relativa al mando y vigilancia de la fuerza pública en la capital, y a la designación del servidor público que la tenga a su cargo, sea asumida plenamente por el jefe de Gobierno. Lo anterior aplica igualmente en lo que corresponde al nombramiento y, en su caso, la remoción del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.²¹

Según se puede apreciar de lo hasta aquí dicho, la conclusión de la reforma política del D.F. exige todavía un esfuerzo adicional tanto de los capitalinos como de sus autoridades. Por el momento, la moneda se encuentra en el aire.

de los poderes de la Unión y capital de la República. Ver también Artículo 36 del Estatuto de Gobierno del D.F.

¹⁹ También los artículos 25, 32, fracción II, III y IV, y 67, fracción XIV y XV del Estatuto de Gobierno del D.F.

²⁰ Artículo 73 constitucional, fracción VIII. La facultad de indulto a los sentenciados por delitos de orden común prevista en el artículo 89, fracción XIV, debe también pasar al jefe de Gobierno del D.F.

²¹ Artículos 33, 34, 35 del Estatuto de Gobierno del D.F. Ver también para el último caso, Artículo 67, fracción IX, del mismo código.